

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, marzo dos (02) de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310500320150049402, promovido por el señor **LIBARDO DE JESÚS CASTAÑO BENJUMEA** contra **FLOTA GRANADA S.A.S.**, a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte accionada, contra la sentencia parcialmente condenatoria emitida el quince (15) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **050** de 2023, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante solicitó la declaratoria de una relación laboral con la pasiva a término indefinido, desde el 1 de enero de 2007 y hasta el 6 de agosto del año 2012, con una asignación salarial final de \$1.100.000, se declarare que las prestaciones sociales se efectuaron de manera incompleta pues no fue sobre el salario real, que se ordene al pago de los valores adeudados por cesantías, intereses a las cesantías, primas vacaciones, salarios adeudados, desde el 1 de enero de 2007, la sanción del artículo 65 del C.S.T. y la indemnización por despido injusto, así como gastos y costas del proceso.

Para fundamentar sus pretensiones expuso, que prestó sus servicios en forma ininterrumpida como conductor de bus intermunicipal, con la empresa accionada, desde el 1 de enero del año 2007, con una asignación salarial de \$1.100.000 hasta el 6 de agosto de 2012, fecha en la que, de manera unilateral e injusta, la empresa dio por terminada la relación laboral. Explicó que el pago de su salario y el de sus ayudantes, lo efectuaba él directamente mediante deducción del producido del vehículo intermunicipal, y durante el tiempo de vinculación en la empresa, sólo se le reportó al Seguro Social el salario mínimo legal mensual vigente, y no sobre el salario correcto. El 6 de agosto del año 2012, la demandada, realizó el pago de las prestaciones sociales causadas entre el 1 de enero de 2007 y 6 de agosto de 2012, sobre el salario de \$580.000, el cual, dice no era el real devengado, y en consignación por cuantía de \$11.813.246 se le pagó por la pasiva parte de los salarios y prestaciones sociales adeudadas.

Admitida la demanda mediante auto del siete (7) de mayo del año dos mil quince (2015), y notificada el diecinueve (19) de junio del mismo año, dio repuesta al libelo gestor por intermedio de procurador judicial así:

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, e indicó que es cierta la relación laboral, pero entre el 1 de enero de 2007 hasta febrero de 2009 existió solo con el propietario del vehículo, quien en su momento era representante de la empresa, doctor Jhon Jairo Bedoya, y desde marzo del año 2009 se vinculó con la empresa

con una asignación salarial igual al mínimo de cada año, valor que el demandante descontaba directamente del producido del bus, pero cuando ingresó con la empresa, sufrió una cardiomiopatía y enfermedad coronaria, por lo que inició a pagarse el salario mínimo por acuerdo verbal entre las partes y, sobre ese salario se efectuaron los pagos de ley. Explicó que la liquidación final de prestaciones sociales se realizó conforme a la ley el 6 de agosto de 2012.

Propuso las excepciones de mérito que denominó *“falta de causa para pedir”*, *“falta de legitimación en la causa por activa”*, *“mala Fe”*, *“enriquecimiento indebido”*.

Interpuso como previas las excepciones *“falta de competencia”*, *“prescripción”*, *“falta de litis consorcio pasivo necesario”* la que fueron resueltas imprósperas en su momento procesal.

En sentencia del 15 de noviembre de 2015, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, declaró que entre las partes existió una relación laboral entre el 1 de enero de 2007 hasta el 6 de agosto de 2012, y ordenó el pago de los aportes en seguridad social en pensiones con sus respectivos intereses, entre el mes de abril de 2010 hasta el mes de agosto de 2012, para lo cual, ordenó el demandante debe solicitar ante Colpensiones la liquidación de los aportes e intereses respectivos, debiendo la pasiva pagar el título pensional en favor del actor. Se absolvió de las demás pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

Presentado por la parte accionada, indicó, estar en desacuerdo con la sentencia proferida, en razón a que, si efectuó los pagos correspondientes a los aportes en pensión por el tiempo entre mayo de 2010 al año 2012, arguyendo que la historia laboral que reposa en la foliatura se encuentra desactualizada, por ende, dice, ningún pago se adeuda.

Corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

En atención al recurso interpuesto, consiste en determinar, si existe o no la obligación de la pasiva de cancelar los aportes en pensión que no se encuentra reflejados en la historia laboral aportada al proceso.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En el proceso que ocupa la atención de la sala, el juez de instancia fijó el litigio en determinar, entre otros, si se adeudaba el pago de cotizaciones en pensión a favor del demandante, durante toda la relación laboral.

Como premisa normativa, se tiene que el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 100 de 1993, establece: *“La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago”*.

Por su parte, el numeral primero del literal a. del Artículo 157 del estatuto de seguridad social en mención, prevé que *“Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el Capítulo I del Título III de la presente Ley”*.

Así mismo el artículo 22 ibídem consagra como obligaciones del empleador ser el responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la multicitada ley 100/1993, modificado por artículo 4º de la Ley 797 de 2003, durante la vigencia de la relación laboral, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los empleadores, y ante la exposición de su omisión en el proceso judicial, le asistía la carga probatoria de acreditar dichos pagos. En el proceso, reposa historial de semanas cotizadas del demandante en el que se observan cotizaciones por su empleador desde el mes de enero del año 2007, folios 11-13, hasta el periodo 2010-04, sin que, con la contestación de la demanda, se allegare elemento probatorio alguno con el que se constate el pago efectivo de los periodos entre 2010-05 a 2012-08, no siendo admisible la mera manifestación de pago, sin respaldo probatorio alguno a tal afirmación.

El trabajador ante esta desidia se encuentra legitimado para reclamar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, esta situación ha sido explicada en providencias 21.378 del 10 de febrero de 2004, radicación 23.216 del 7 de diciembre de 2006, 38.471 de 2013 y SL 3009 de 2017, proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme lo anterior, se comparte la decisión tomada por el juez de primera instancia, sin embargo, se modificará en el sentido de imponer en el demandado y no en el demandante, la carga de solicitar ante la pasiva la liquidación de los periodos faltantes, y pagarla dentro del término que el fondo pensional establezca.

Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandada y a favor del demandante, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma \$1.160.000, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, vigente al momento de presentación de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación.

SEGUNDO: Modificar el numeral primero de la sentencia, y ordenar al empleador efectuar las acciones pertinentes ante Colpensiones para la liquidación y pago de los periodos comprendidos entre mayo de 2010 a agosto de 2012, y pagarlos en el término que la entidad de seguridad social establezca.

TERCERO: Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandada y a favor del demandante, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma \$1.160.000, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, vigente al momento de presentación de la demanda.

CUARTO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>